Alejandro Sánchez

Received: 1 January 1970 Accepted: 1 January 1970 Published: 1 January 1970

Abstract

545 / 5,000 Translation results The objective of the investigation was: to determine the human rights of the people, in the face of a pandemic such as Covid-19, as well as the obligation of a Nation before a phenomenon of that nature, relating the three variables, to establish whether there is a right or not, to compensation in case of death, for the relatives to charge of the State, the methodology used was qualitative, documentary, descriptive, correlational and explanatory, concluding that there is responsibility of the Nation, having to analyze each specific case in particular.

Index terms— human rights, covid-19, compensation for death.

1 I.

Introducción i bien es cierto que, el presente artículo es el resultado del proyecto de investigación planteado por lo que constituye un trabajo acabado, es también cierto que, es continuación de: COVID-19 y su relación con la ciencia jurídica desde la perspectiva de México 1 1 Por constituir antecedente y primer resultado de esta investigación, se recomienda la lectura del artículo siguiente: Sánchez, A., (2020). COVID-19 y su relación con la ciencia jurídica desde la perspectiva de México. Utopía y praxis latinoamericana, Vol. 25, Núm. Esp. (11). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4278321> por lo que la lectura de éste, permitirá observar al analista con mayor profundidad, lo encontrado y planteado.

2 II.

La Naturaleza Jurídica ??e

3 Los Derechos Humanos

En la CPEUM, en su parte dogmática, se encuentran consagrados los derechos fundamentales, en ellos, en su primer artículo se consagra el derecho a todas las personas a gozarlos, así también, de las garantías 2 para su protección, el principio pro persona 3 2 En México, las garantías para la protección de los derechos humanos o derechos fundamentales son: para el gobernado, el Juicio de Amparo y el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en el tema analizado aplica el primero mencionado. ??

4 F

Author: Profesor Investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, adscrito a la FCAyS de la Universidad Autónoma de Baja California, México. e-mail: alexsasacc@uabc.edu.mx Partiendo de las premisas metodológicas mencionadas, se analizan las variables: 1. "la naturaleza jurídica de los derechos humanos"; 2. "la obligación de una Nación ante su pueblo respecto a los derechos humanos"; 3. "en caso de muerte por covid-19, hay indemnización por parte del Estado a los familiares"; utilizando como hilo conductor, el derecho humano a la salud ante una pandemia y la indemnización en caso de muerte por Covid-19. Para llegar a la conclusión, se partió de lo general a lo particular, utilizando premisas validas y verdaderas en la Ciencia Jurídica, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pronunciamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), leyes secundarias, libros, artículos científicos, deducciones y comparaciones del autor, encontrándose que sí, es responsabilidad del Estado atender fenómenos como el Covid-19 y es responsable ante sus habitantes de sus acciones, concluyendo que, se debe analizar cada caso en concreto, para determinar la indemnización a los familiares por muerte a causa de una pandemia. la obligación 4 de las autoridades respecto a estos derechos, y la prohibición a la discriminación 5 Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en virtud del

45 cual, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la propia Constitución y
46 los tratados internacionales de los que México sea Parte, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido
47 y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona; de modo que ante varias alternativas interpretativas,
48 se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida.
49 De esa manera, debe atenderse al principio de prevalencia de interpretación, conforme al cual, el intérprete no
50 es libre de elegir, sino que debe seleccionarse la opción interpretativa que genere mayor o mejor protección a los
51 derechos. (registro digital: 2021124,2019,2000) 4 El párrafo tercero del artículo 1º. De la Constitución Política de
52 los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de respetar
53 los derechos humanos y, en el ámbito de sus competencias, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen
54 violaciones en su contra; en ese sentido, en observancia del deber constitucional de respeto, resulta acorde a
55 la competencia de las autoridades que conozcan del juicio de amparo que al decretar una medida cautelar de
56 suspensión, hagan mención destacada, de manera potestativa, de la existencia de otros derechos fundamentales
57 que, según el caso concreto, asistan al quejoso y que deben seguirse respetando por las autoridades responsables,
58 siempre que tengan vinculación con los actos inicialmente reclamados y con las autoridades señaladas como
59 responsables, pues dicha facultad tiene como finalidad favorecer, desde la labor jurisdiccional, una cultura de
60 respeto a los derechos fundamentales, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, conflictos que eventualmente
61 pueden suscitarse en las relaciones de los gobernados con las autoridades, en cada situación concreta que llegue al
62 conocimiento de las autoridades de amparo. (Registro digital: 2017889,2018,1537) 5 Discriminación: Se entenderá
63 por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
64 sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
65 menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en
66 uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la
67 edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
68 características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
69 la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los
70 antecedentes penales o cualquier otro motivo; También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia,
71 cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras
72 formas conexas de intolerancia.

73 5 , la Ley

74 El derecho de no discriminación que consagra el tercer párrafo del artículo 1º. De la Constitución Política de los
75 Estados Unidos Mexicanos proscribe cualquier distinción motivada, entre otras, por razones de género y edad,
76 condición social, religión o cualquiera otra análoga que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o
77 Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), es de orden público e interés social y tiene por
78 objeto eliminar toda forma de discriminación. Esta es la naturaleza formal o jurídica de los derechos humanos,
79 empero, la dignidad humana se cristaliza cuando se logra lo siguiente.

80 Por el método establecido, este análisis se realiza de lo general a lo particular, por ello, ahora se menoscabar
81 los derechos y libertades de las personas. Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
82 reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, en su artículo 4o. establece que
83 para efectos de esa ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en
84 el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
85 lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular
86 el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. No puede,
87 pues, existir discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra
88 condición o circunstancia personal o social, etc., que atente contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la
89 Constitución, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, siendo entonces que
90 hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho fundamental. Ahora
91 bien, este principio de no discriminación rige no sólo para las autoridades sino también para los particulares, pues
92 lo contrario sería tanto como subordinar la supremacía constitucional a los deseos o actos de los particulares.
93 Así, estos últimos tienen el deber de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, lo que no
94 implica necesariamente que realicen conductas positivas, pero sí están obligados a respetar los derechos de no
95 discriminación y de igualdad real de oportunidades. Poniendo el principio de no discriminación en relación con
96 otros derechos, es posible ilustrar la forma en que se puede aplicar a las relaciones entre particulares: verbigracia,
97 en principio los empleadores no podrán lícitamente distinguir entre sus trabajadores con base en alguno de los
98 criterios prohibidos por la Constitución; tampoco lo podrán hacer quienes ofrezcan un servicio al público (ejemplo,
99 negando la entrada a un estacionamiento público a una persona por motivos de raza) o quienes hagan una oferta
100 pública para contratar (ejemplo, quienes ofrezcan en renta una vivienda no podrán negarse lícitamente a alquilarla
101 a un extranjero). Lo anterior significa que la prohibición de no discriminar puede traducirse en una limitación a
102 la autonomía de la voluntad, o autonomía de las partes para contratar, misma que debe ceder siempre que esté en
103 juego la dignidad de la persona, de suerte que si mediante el pretexto de la autonomía de la voluntad se pretende
104 cubrir una ofensa manifiesta, humillante, anuladora de la dignidad, los derechos fundamentales deben entrar en
105 acción para reparar la violación; criterio aplicable en un caso en que se reclama indemnización por daño moral,
106 derivado de la conducta discriminatoria atribuida a un particular. (registro digital: 160554, 2011, 3771)

107 Volume XXII Issue II Version I 24 () Los derechos humanos son los medios necesarios para la satisfacción de las
108 necesidades humanas de una forma digna; al concretizarse, se permite un desarrollo armónico, digno, igualitario
109 de las sociedades humanas, con lo que se busca la satisfacción de las necesidades humanas, lo que produce placer
110 y por tanto felicidad. En los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos están reconocidos en la CPEUM,
111 constituyéndose así, los derechos fundamentales, éstos están consagrados en su parte dogmática y en los tratados
112 internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte. (Sánchez, 2020, pp.
113 195 y 196) centra en el derecho humano a la protección de la salud 6 y salubridad general 7 Toda Persona tiene
114 derecho a la protección de la salud , lo cual se encuentra en el párrafo cuarto del artículo cuatro de la CPEUM y
115 reglamentado en la Ley General de Salud (LGS), el primero establece: 8 El artículo 73 de la CPEUM establece las
116 facultades del Congreso de la Unión, para dictar leyes sobre salubridad general de la República, asimismo, indica
117 que el Consejo de Salubridad General . La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
118 salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
119 conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la CPEUM. La Ley definirá un sistema de salud para
120 el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud,
121 para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 9 De la misma manera,
122 fundamenta que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de dependerá directamente del
123 Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán
124 obligatorias en el país. 6 Se entiende por protección social en salud a "la garantía que la sociedad otorga, por
125 medio de los poderes públicos, para que un individuo o un grupo de individuos, pueda satisfacer sus necesidades
126 y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o de alguno de los subsistemas de
127 salud existentes en el país, sin que la capacidad de pago constituya un factor restrictivo". La protección social
128 en salud, constituye un marco de referencia para la concreción del acceso a niveles adecuados de cuidados de la
129 salud, entendiendo a ésta como un derecho o un bien preferencial que la sociedad ha consagrado. Las políticas de
130 protección social en salud, deben orientarse a la universalidad, garantizando el acceso, la calidad, la oportunidad
131 y la protección financiera de las personas, familias y comunidad. Sin embargo, aunque universales, estas políticas
132 deben estar atentas a producir respuestas especiales para necesidades especiales, siendo permeables al enfoque
133 de género y proactivas en la atención de las necesidades de las minorías étnicas y culturales. (OPS y OMS, 2007,
134 1) 7 En la Ley General de Salud, se reglamenta la materia de salubridad general, específicamente su artículo 3,
135 en el cual en su fracción II establece que es materia de salubridad general la atención médica, asimismo, en la
136 fracción XV establece que, la prevención y el control de enfermedades transmisibles, de lo que se deduce que
137 es responsabilidad de la Secretaria de Salud, por tanto, el Estado mexicano, de la atención de la enfermedad
138 llamada Covid-19 y sus variantes. 8 Se entiende por salud, un estado de completo bienestar físico, mental y
139 social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 9 El Consejo de Salubridad General es, un
140 órgano que depende directamente del Presidente de la República, está integrado por un presidente que será el
141 Secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia
142 Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine.
143 Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar
144 para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.

145 La Ley General de Salud, reglamenta el derecho a ella y establece las bases y modalidades para el acceso a los
146 servicios de salud, la protección de la salud tiene la finalidad de, la prolongación y mejoramiento de la calidad de
147 la vida humana, para el tema en estudio, en su artículo 181 establece que, "en caso de epidemia de carácter grave,
148 peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la
149 Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la
150 salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República".

151 A partir de las premisas anteriores se puede concluir que, los derechos humanos son, aquellos medios
152 indispensables, para la satisfacción de las necesidades humanas que nos corresponden por el solo hecho de haber
153 nacido como tales, así se afirma que, la naturaleza jurídica de los derechos humanos obra como fundamento
154 universal en los tratados internacionales, de estos los toma o formaliza cada Nación estableciéndolos como base
155 constitucional, a partir de ese momento se constituyen en derechos fundamentales de los gobernados, documento
156 en el cual también se deben establecer las garantías, para el cumplimiento o restablecimiento de aquéllos, entre
157 esos derechos fundamentales se encuentran el derecho a la salud y a la vida.

158 6 III. La Obligación de Una Nación Ante

159 su Pueblo, Respecto a Los Derechos Humanos

160 La razón de ser de un Estado Nación es, la protección de las personas residentes en su territorio, por ello,
161 cada País establece o debe establecer en su ley suprema, la parte dogmática o la parte que contiene los derechos
162 humanos adoptados por ese gobierno, siendo el titular de éstos derechos cada una de las personas que habitan
163 en ese territorio; y, el obligado a cristalizarlos, respetarlos y garantizarlos es el mismo Estado Nación, por ello,
164 ante una pandemia como lo es el Covid-19 que afecta la salud y la vida del ser humano, no hay duda que es
165 obligación de cada Estado garantizar la salud y la vida de sus habitantes.

166 Por lo anterior, el día 9 de abril del año 2020, la Como órgano de protección de los derechos humanos, consciente
167 de los problemas y desafíos extraordinarios que los Estados americanos, la sociedad en su conjunto, y cada persona
168 y familia están afrontando como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus COVID19, emite la

6 III. LA OBLIGACIÓN DE UNA NACIÓN ANTE

169 presente declaración a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia
170 y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para
171 abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de
172 Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los
173 estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal.

174 Asimismo, la CIDH en particular o de forma más específica establece que, las medidas que tomen los Estados
175 deben ser en cumplimiento estricto al respeto de los derechos humanos, declarando que:

176 Todas aquellas medidas que los Estados adopten, para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir
177 el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos
178 definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los
179 demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.

180 Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser
181 garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos
182 que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

183 En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la
184 vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, el derecho a la
185 salud, debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando los principios fundamentales de la bioética,
186 de conformidad con los estándares interamericanos en cuanto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
187 calidad, además, es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia.

188 De la premisa anterior se deduce que, ante una pandemia como lo es el Covid-19, los Estados deben garantizar
189 el derecho a la vida, a la salud, sin ningún tipo de discriminación, además de garantizar el acceso a la justicia y
190 las vías de denuncia.

191 De igual forma, el día 27 de julio del año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicta la
192 resolución No. 4/20 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON COVID-19, en la que entre otras
193 indicaciones establece:

194 Las poblaciones de los países de las Américas han sido y continúan siendo, extremadamente afectadas por
195 la pandemia. Los amplios grupos sociales con COVID-19, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad,
196 exigen una atención prioritaria en la defensa y protección de sus derechos. Las personas con COVID-19 corren
197 un especial riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a la salud, mediante la
198 adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos.

199 De esta premisa se deduce que, hace énfasis en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, los que
200 requieren de una defensa y protección de sus derechos a la vida y a la salud, ante la pandemia que se vive.

201 En su apartado de consideraciones párrafo tercero de la resolución 4/20 subraya que los Estados deben:

202 Adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la atención adecuada y oportuna de la
203 salud y del cuidado de las personas, particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, y que todo
204 menoscabo a los derechos humanos atribuibles a la acción u omisión de cualquier autoridad pública compromete
205 la responsabilidad internacional de los Estados.

206 En este punto, se hace énfasis en que los Estados deben garantizar la atención oportuna de la salud,
207 estableciendo que hay responsabilidad internacional del Estado por cualquier acción u omisión de sus autoridades,
208 ante la vulneración a esos derechos.

209 En su apartado de consideraciones párrafo décimo quinto de la resolución 4/20 subraya que los Estados deben:

210 Aún en el contexto de la pandemia de COVID-19, los Estados tienen la obligación de prevenir con la debida
211 diligencia las violaciones de derechos humanos y también de proveer un recurso adecuado y efectivo que permita
212 investigar seriamente, dentro de un plazo razonable, sancionar a los responsables y asegurar a la víctima y a sus
213 familiares una reparación adecuada.

214 Aquí, se establece que los Estados tienen la obligación de prevenir, de proveer un recurso adecuado y efectivo,
215 para sancionar y asegurar una reparación adecuada.

216 En su apartado de resolutivos de la resolución 4/20 indica que los Estados deben: La finalidad principal de
217 toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, para
218 proteger a las personas con COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de
219 igualdad y no discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos
220 humanos. Con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con
221 COVID-19, los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en condiciones de igualdad, respecto de
222 las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de
223 pandemia.

224 El fin de este mandato es la protección de la vida, bajo los principios de igualdad y no discriminación,
225 accesibilidad y asequibilidad a la atención médica.

226 En su apartado de resolutivos de la resolución 4/20, formaliza las directrices para la prioridad de la vida de
227 las personas con COVID-19 en las políticas públicas, recursos y cooperación, en la que indica que los Estados
228 deben:

229 Resulta prioritario que los Estados realicen esfuerzos focalizados para identificar, asignar, movilizar y hacer
230 uso del máximo de los recursos disponibles con el fin de garantizar los derechos de las personas con COVID-19.
231 Ello incluye el diseño de planes presupuestarios y compromisos concretos, entre ellos la asignación de fondos y

232 partidas específicas, así como el aumento sustantivo de presupuesto público, priorizando garantizar el derecho a
233 la vida, a la salud y los programas sociales destinados a apoyar a las personas con COVID-19.

234 Se establece el fundamento internacional que, ordena a los Estados hacer uso máximo de los recursos para
235 garantizar el derecho a la vida y a la salud.

236 En su apartado de resolutivos de la resolución 4/20, formaliza las directrices sobre el acceso a la justicia
237 de las personas con COVID-19, en la que indica que los Estados deben: Para garantizar el derecho de acceso
238 a la justicia de las personas con COVID-19, deben asegurarse recursos dirigidos a investigar de manera seria,
239 oportuna y diligente las afectaciones a sus derechos, que incluyen irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y
240 rehabilitación médica recibida, atención médica en instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de
241 su infraestructura o higiene, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades.
242 Se deben realizar todas las diligencias indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias
243 que puedan contribuir al éxito de la investigación, tales como el debido registro y cuidado del historial clínico, la
244 autopsia y los análisis de restos humanos. Estas actividades deben realizarse de forma rigurosa, por profesionales
245 competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

246 Los procesos relacionados con denuncias de afectaciones a los derechos de las personas con COVID-19, así
247 como la ejecución de las sanciones deben ser decididos en un plazo razonable. Cuando lo que se encuentra en
248 juego en el proceso judicial es de crucial importancia para salvaguardar los derechos de la persona afectada, los
249 Estados deben actuar con celeridad y diligencia excepcional, aun cuando este tipo de casos pueda significar cierto
250 nivel de complejidad.

251 Para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables se debe hacer uso de todas las vías disponibles; la falta
252 de determinación de responsabilidad penal, no debe impedir la investigación de otros tipos de responsabilidades
253 y determinación de sanciones, tales como las administrativas o disciplinarias.

254 Se establece el fundamento internacional que, ordena a los Estados hacer uso máximo de los recursos, para
255 garantizar el derecho de acceso a la justicia, realizar las diligencias indispensables para la conservación de los
256 elementos de prueba y evidencias, decidiendo en un plazo razonable las responsabilidades, actuando con celeridad
257 y diligencia excepcional.

258 Tanto los organismos internacionales en general, como las naciones en particular, han realizado diferentes actos
259 de autoridad o políticas públicas, para hacer frente a la pandemia Covid-19, como lo observamos en la Corte
260 Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, así mismo, se observa la actuación de países como Chile,
261 Colombia y Perú.

262 Describir las estrategias que fueron establecidas por Chile, Colombia y Perú durante el primer año de la
263 pandemia por COVID-19 y compararlas desde el enfoque de derechos de la niñez. La pandemia ha afectado
264 el funcionamiento de los sistemas económicos, sociales, de salud, educación, medioambiente y gobernanza de
265 estos tres países. En este contexto, la región enfrenta el complejo desafío de controlar la pandemia sin dejar de
266 garantizar el ejercicio de derechos de su población. (González, et al., 2021, p. 1) El análisis confirma, la necesidad
267 de que los países consideren a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) como sujetos de derecho en el ciclo de las
268 políticas públicas. Con la pandemia por COVID-19, ha quedado demostrado que tanto las características de los
269 países como los enfoques imperantes de análisis de políticas públicas en salud requieren poner especial atención
270 a la participación deliberativa de los NNA. (González, et al., 2021, p. 6) Ahora bien, no hay duda de que los
271 Estados son los obligados de garantizar el derecho a la salud y a la vida de sus habitantes ante pandemias como
272 el Covid-19, por tanto, ante una acción u omisión que violente esos derechos, se actualiza su responsabilidad.

273 La responsabilidad patrimonial del Estado podría ser una garantía que proteja la integridad patrimonial,
274 o bien la integridad en general del ser humano en todos sus aspectos respecto de actos del Estado, tomando
275 en consideración que no se constriñe únicamente a cuestiones patrimoniales, sino que también incluye las
276 extrapatrimoniales. Sin embargo, en lo referente al criterio de que la proporcionalidad y equidad pueden llevar a
277 una solución justa para mantener íntegro el patrimonio, consideramos bastante la idea antes apuntada, consistente
278 en que "la indemnización se debe determinar como resultado de la valoración de los derechos lesionados", pues
279 con ello se pone de relieve el principio de justicia. (León, 2020, p. 193) De las resoluciones, acuerdos y decretos,
280 dictados por los organismos internacionales y asumidos por los Estados partes, se deduce que, reconocen su
281 obligación de garantizar el derecho a la salud y a la vida de sus habitantes ante pandemias como el Covid-19,
282 además, reconocen que ante la acción u omisión que trasgrede esos derechos, las víctimas y/o familiares tienen
283 derecho a una indemnización.

284 IV.

285 **7 En Caso de Muerte Por Covid-19, Habrá Indemnización Por** 286 **Parte del Estado a Los Familiares**

287 Se delimita el análisis a los Estados Unidos Mexicanos, para determinar si jurídicamente los deudos de un fallecido
288 por covid-19, tienen derecho o no, a una indemnización a cargo del Estado.

289 Lo primero que hay que analizar para determinar si se configuran los presupuestos para que se reconozca
290 esta responsabilidad patrimonial (daño, relación de causalidad entre el hecho o de la omisión con el daño,
291 imputabilidad/factor de atribución y un obrar u omisión irregular o antijurídica -"falta de servicio"-) es la
292 razonabilidad de los medios dispuestos para prevenir la pandemia. En otras palabras, si tomaron las medidas

7 EN CASO DE MUERTE POR COVID-19, HABRÁ INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LOS FAMILIARES

293 adecuadas y posibles en tiempo oportuno. Lo segundo que corresponde hacer es analizar la política sanitaria
294 general adoptada por un Estado para paliar y combatir la pandemia, una vez que la misma se instaló.
295 Ambos razonamientos tienen que ver, pues, con la legalidad del obrar, con el "funcionamiento normal" de
296 la Administración. Tienden a indagar sobre los datos que permitan determinar si hubo o no hubo "falta de
297 servicio". Se espera de la Administración un comportamiento diligente que tenga en cuenta todo lo necesario
298 para la eficiencia, para la prevención; para evitar lo evitable en términos de contagios. Y, por fin, corresponderá
299 analizar el caso concreto de cada víctima. En efecto, aun cuando se considere razonable tanto lo actuado de
300 modo general para prevenir la pandemia, como también lo actuado para combatirla, habrá que analizar cada
301 caso concreto. Puede suceder que en un caso concreto no se hayan seguido los protocolos generales que hubieran
302 permitido salvar una vida. Por ejemplo, si no se dispone a tiempo de un respirador en el marco de una situación
303 clínica de cuidado intensivo. (Gambier, 2020, pp. 4 y 5) Se debe hacer énfasis en este punto conclusivo, en efecto,
304 aun cuando se considere razonable tanto lo actuado de modo general para prevenir la pandemia, como también
305 lo actuado para combatirla, habrá que analizar cada caso concreto.

306 La pandemia de COVID-19 y las medidas que el Estado ha implementado, para hacer frente a la emergencia
307 sanitaria han provocado significativos daños de diversa naturaleza que, eventualmente, podrían comprometer la
308 responsabilidad patrimonial estatal. Entre otros, cabe mencionar los daños a la salud o a la vida de quienes
309 han padecido la afección y que se contagiaron en el ejercicio de sus funciones como agentes estatales o al recibir
310 atención médica en un centro de salud público, como así también, los perjuicios ocasionados por las acciones del
311 Estado implicadas en la gestión de la emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 y ampliada por el decreto
312 del Poder Ejecutivo nacional 260/2020. La casuística es sumamente variada. En determinados supuestos el deber
313 de responder estatal será muy claro (v.gr., daños sufridos por personal que desempeña funciones en el ámbito
314 sanitario), mientras que en otros no tanto debido a las dificultades que pueden presentarse para la configuración
315 de los requisitos que deben concurrir para que proceda la responsabilidad del Estado, ya sea por su actuación
316 ilegítima como legítima. (Perrino y Sanguinetti, 2020, 1) Se compromete la responsabilidad estatal, por los daños
317 a la salud o a la vida de quienes han padecido la afección y que se contagiaron en el ejercicio de su función, o al
318 recibir atención médica, o en cualquier otra circunstancia, debiendo acreditarse requisitos legales para el reclamo
319 al pago de una pensión, o compensación.

320 Existen diversas sentencias jurisdiccionales que determinan la responsabilidad del Estado por violación al
321 derecho a la vida y a la integridad personal, por ejemplo.

322 En Cuscul Pivaral, la Corte resolvió que el Estado puede ser responsable por violación del derecho a la vida
323 en el contexto médico si se acreditan los siguientes elementos: a) cuando por actos u omisiones se niegue a un
324 paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica o tratamientos médicos esenciales, a pesar de ser
325 previsible el riesgo que implica dicha denegación para la vida del paciente; o b) se acredite una negligencia médica
326 grave, y c) la existencia de un nexo causal entre el acto acreditado y el daño sufrido por el paciente. También
327 destacó la vinculación entre una atención médica adecuada y el derecho a la integridad personal. (CIDH, MPI,
328 IECEQ, 2020, p. 13) En los Estados Unidos Mexicanos, la CPEUM en su artículo 4, párrafo cuatro existe el
329 derecho fundamental para todas las personas a la protección de la salud, también, se encuentran las bases para
330 el sistema de salud para el bienestar. Este artículo está reglamentado por la Ley General de Salud, la cual es de
331 aplicación en toda la República, es de orden público e interés social, es decir, establece los parámetros a los que
332 se deben ajustar las autoridades y particulares que, prestan los servicios de salud.

333 Resulta necesario vincular el artículo 123 de la CPEUM, pues en él se establecen las bases para los derechos
334 de los trabajadores, entre ellos, lo concerniente a los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y la
335 indemnización por estas causas, las garantías para la salud y la vida de los trabajadores, las cuales fundamentan
336 que.

337 Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de
338 los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los
339 patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o
340 simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta
341 responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. (CPEUM,
342 1917, artículo 123 apartado A, párrafo XIV)

343 Volume XXII Issue II Version I 28 () El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de
344 su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a
345 adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de
346 trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los
347 trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al
348 efecto, las sanciones procedentes en cada caso. (CPEUM, 1917, artículo 123 apartado A, párrafo XV) De igual
349 forma, el artículo 123 de la CPEUM apartado B, establece las bases para el trabajo digno entre los Poderes de la
350 Unión y sus trabajadores, entre ellos, lo concerniente a los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y la
351 indemnización por estas causas, las garantías para la salud y la vida de los trabajadores, las cuales fundamentan
352 que.

353 La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y
354 enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y
355 muerte. b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine

356 la ley. c) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en
357 la proporción que determine la ley. (CPEUM, 1917, artículo 123 apartado B, párrafo XI) La Ley Federal del
358 Trabajo (LFT), es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas
359 en el artículo 123, apartado A, de la CPEUM, establece que, los beneficiarios del trabajador fallecido, tendrán
360 derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar
361 los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.

362 V.

363 8 Conclusión

364 El nexa causal entre los derechos humanos y la obligación de una Nación ante su pueblo, se encuentra exactamente
365 en que la razón de ser de un Estado es, la protección de las personas, por ello, establecen o deben establecer en
366 su ley suprema, la parte dogmática que contiene los derechos humanos adoptados por ese país, siendo el titular
367 de éstos derechos cada una de las personas habitantes en ese territorio; y, el obligado a cristalizarlos, respetarlos
368 y garantizarlos es el mismo Estado, por lo que, ante una pandemia como lo es el Covid-19 que afecta la salud y
369 la vida del ser humano, no hay duda que es responsabilidad de cada Nación garantizar la salud y la vida de sus
370 habitantes, cuando esto no se cumple por cualquier causa, el Estado debe pagar la reparación del daño.

371 En los Estados Unidos Mexicanos, para determinar si jurídicamente los deudos de un fallecido por covid-
372 19, tienen derecho o no, a una indemnización, se debe analizar cada caso en concreto, aun cuando se considere
373 razonable tanto lo actuado de modo general para prevenir la pandemia, como también lo actuado para combatirla.

374 De esta forma, en la CPEUM en su artículo 4, párrafo cuatro existe el derecho fundamental para todas las
375 personas a la protección de la salud, también, se encuentran las bases para el sistema de salud. Este artículo está
376 reglamentado por la Ley General de Salud, la cual es de aplicación en toda la República, de orden público e interés
377 social, es decir, establece los parámetros a los que se deben ajustar las autoridades y particulares que, prestan los
378 servicios de salud. Asimismo, en el artículo 123 de la misma CPEUM, se establecen las bases constitucionales de
379 los derechos de los trabajadores, de esta se origina la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos secundarios,
380 que regulan los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como del privado.

381 Por todo lo anterior, se afirma que, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentre
382 registrada la persona, o no Las leyes secundarias que reglamentan el apartado B del artículo 123 de la CPEUM,
383 son varias, entre ellas, se menciona la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
384 la cual establece que, los requisitos exigidos por esa ley a los familiares de un militar, para tener derecho a las
385 prestaciones derivadas de la muerte de éste, deben estar reunidos al acaecer el fallecimiento.

386 Sánchez, Sánchez y Sánchez (2021) afirman que se describen, correlacionan y explican las variables en
387 estudio, además, se construye un silogismo jurídico objetivo y profesional, estableciendo como premisa mayor
388 lo fundamentado en la CPEUM en sus artículos 1, 4 y 123, de igual forma, se utilizan las leyes secundarias
389 citadas. asimismo, se sustenta con premisas validas y verdaderas establecidas en la doctrina, por supuesto con
390 las deducciones y expertis del autor de esta obra, para llegar a las conclusiones.

391 El vínculo existente entre las tres variables; los derechos humanos, la obligación de una Nación ante su pueblo
392 y la indemnización por muerte en México.

393 Sobre los derechos humanos puedo concluir que, estos corresponden al ser humano por el hecho de haber nacido
394 como tales, se encuentran escritos en documentos internacionales, adoptados por los Estados miembros en su Ley
395 Suprema, lo que los constituye en derechos fundamentales, el titular de ellos son los gobernados y el obligado a
396 cumplirlos es el gobierno o el Estado. Su naturaleza estriba en que son los medios necesarios para la satisfacción
397 de las necesidades humanas de una forma digna, como los son el derecho a la salud, a la vida, sin ningún tipo de
398 discriminación. pertenecer a ninguno, tienen derecho sus familiares a recibir las prestaciones devengadas hasta el
399 momento de su muerte y a una indemnización a cargo del Estado, cuando se trate de muerte por una pandemia
400 como el COVID-19.

401 VI.

402 9 Propuesta

403 Se propone seguir con esta investigación de forma ahora más específica, delimitando el análisis a un país, por
404 ejemplo, México, o a los Estados Unidos de Norte América, para determinar el nexa causa-efecto, los requisitos
405 de una demanda, ante qué autoridades se deben reclamar estos derechos, además, para continuar con la difusión
406 y divulgación del conocimiento y sea útil, tanto para estudiantes universitarios como operadores jurídicos, lo
407 anterior, con un enfoque de las ciencias jurídicas, sin excluir la parte multidisciplinaria, para establecer vínculos
408 entre las diferentes áreas del conocimiento que se involucren.

409 Se propone a los gobiernos que, establezcan una política pública de divulgación, para las personas que han
410 sufrido la muerte de un familiar por una pandemia como el Covid-19, en la que se les indique que documentos
411 deben presentar y ante quien, para recibir el pago de los haberes que corresponden.

[Note: , Cuando una norma pueda interpretarse de diversas formas, para solucionar el dilema interpretativo, debe atenderse al artículo 1º., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos]

Figure 1:

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y
 RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES”, en su preámbulo establece que:

Year 2022
 25
 Volume XXII Issue
 Version I
)
 (-Global Journal of
 man Social Science)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
 realiza la declaración 1/20 sobre el "COVID-19 Y
 DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y
 DESAFÍOS DEBEN

© 2022 Global Journ

Figure 2:

412 Volume XXII Issue II Version I 30 () ^{1 2 3 4}

¹El método significa, la manera de alcanzar un objetivo de conocimiento de manera ordenada y coherente. Desde esta perspectiva, la falta de método en la actividad humana trae consigo, un obstáculo que hace inaccesible la comprensión de la realidad objetiva. Empero, a pesar que el concepto método implica orden no puede uno sino maravillarse del extremo desorden reinante en este campo, ya que, existen diferentes puntos de vista sobre el método o los métodos.(Sánchez, 2020, p.6) Una buena investigación es aquella que disipa dudas con el uso del método científico, es decir, clarifica las relaciones entre variables que conciernen al fenómeno bajo estudio; de igual manera, planea con cuidado los aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y confiabilidad de sus resultados.(Hernández, Fernández- Collado, Baptista, 2006, p.117)

²()

³Year 2022 F Los Derechos Humanos del Pueblo, Ante Una Pandemia Como el Covid-19, desde una Á?ptica Jurídica

⁴© 2022 Global JournalsF Los Derechos Humanos del Pueblo, Ante Una Pandemia Como el Covid-19, desde una Á?ptica Jurídica

- 413 [Covid-19 et al.] , Y Covid-19 , El Derecho A La , Salud . Users/daffn/Desktop/art%C3%ADculo%202022/
414 INFOGRAF%C3%8DA_covid_REV_6_mayo-V2.pdf
- 415 [Social and Salud] , Protección Social , Salud . [https://www3.paho.org/hq/index.php?option=](https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4180:2007-proteccion-social-salud&Itemid=2080&lang=esconsultadael3/02/2022)
416 [com_content&view=article&id=4180:2007-proteccion-social-salud&Itemid=2080&lang=](https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4180:2007-proteccion-social-salud&Itemid=2080&lang=esconsultadael3/02/2022)
417 [esconsultadael3/02/2022](https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4180:2007-proteccion-social-salud&Itemid=2080&lang=esconsultadael3/02/2022)
- 418 [Caso and México] , Amparo Indirecto Contra Un Acto De Expropiación Teoría Y Praxis De Un Estudio De
419 Caso , México . México: MAPorrúa.
- 420 [Internacionales ()] , Los Problemas Y Desafíos Deben Ser Abordados Con Perspectiva De Derechos Humanos
421 Y Respetando Las Obligaciones Internacionales . COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS. Users/daffn/
422 Desktop/art%C3%ADculo%202022/declaracion_1_20_ESP.pdf 2020. Corte Interamericana de Dere-
423 cho Humanos
- 424 [Sánchez et al. ()] , R. ; Metodología De La Ciencia Del Sánchez , Derecho , México . 2020. México: Porrúa.
- 425 [Derechos Humanos de las Personas con Covid-19 (4/20) Comisión Interamericana de Derecho Humanos ()]
426 ‘Derechos Humanos de las Personas con Covid-19 (4/20)’. Users/daffn/Desktop/art%C3%ADculo%
427 202022/Derechos%20humnos%20de%20las%20personas%20con%20covid%2019.pdf *Comisión*
428 *Interamericana de Derecho Humanos* 2020. (Recuperado de file)
- 429 [Ley Federal Del Trabajo] *Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970 con su última reforma publicada*
430 *en el DOF el, Ley Federal Del Trabajo* . [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_310721.pdfconsultadael04/02/2022)
431 [310721.pdfconsultadael04/02/2022](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_310721.pdfconsultadael04/02/2022) p. . (Recuperado de)
- 432 [Tesis Pc ()] ‘Décima Época, t. II, septiembre de’. *Semanario Judicial de la Federación* , : Tesis, I P Pc (ed.) 10a.
433 2018. p. 1537.
- 434 [Sánchez ()] *El derecho humano al debido proceso y el acceso a la justicia desde una perspectiva de la praxis civil*,
435 A Sánchez . 2020. México, México: MAPorrúa.
- 436 [Gambier ()] *LA PANDEMIA COVID-19 Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO*, B Gambier .
437 Users/daffn/Desktop/art%C3%ADculo%202022/PRINCIPALAARTICULO%20RESPONSABILIDAD%
438 20DEL%20ESTADO%20POR%20MUERTE%20COVID.pdf 2020.
- 439 [Perrino and Sanguinetti ()] *La responsabilidad patrimonial del Estado por su actuación en el marco de la*
440 *pandemia de COVID-19*, P E Perrino , J C Sanguinetti . RDA 2020-130. [http://cdi.mecon.gov.ar/](http://cdi.mecon.gov.ar/bases/jurid/19461.pdf)
441 [bases/jurid/19461.pdf](http://cdi.mecon.gov.ar/bases/jurid/19461.pdf) 2020. Thomson Reuters. p. 1.
- 442 [Ley del Instituto de Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 d
443 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/84_070519.pdfconsultadael04/02/2022
444 *Ley del Instituto de Seguridad social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicada en el Diario Oficial*
445 *de la Federación el 9 de julio de 22003 con su última reforma publicada en el DOF el día, 07-05-2019.*
446 (Recuperado de)
- 447 [León ()] ‘Límites a la responsabilidad patrimonial por daño moral’. O A León .
448 10.22201/ij.24484881e.2020.43.15182. [http://dx.doi.org/10.22201/ij.24484881e.2020.43.](http://dx.doi.org/10.22201/ij.24484881e.2020.43.15182)
449 [15182](http://dx.doi.org/10.22201/ij.24484881e.2020.43.15182) *Cuestiones constitucionales, Núm* 2020. (43) p. 193.
- 450 [Hernández et al. ()] *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN?N. 4ª Edic*, R Hernández , C Fernández-
451 Collado , P Y Baptista Lucio . 2006. México, México: McGraw-Hill Interamericana.
- 452 [publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 con su última reforma publicada en el DOF el (2021)]
453 *publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 con su última reforma publicada en*
454 *el DOF el, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdfconsultadael01/02/*
455 [2022](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdfconsultadael01/02/2022) 28-05-2021. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Recuperado de)
- 456 [González et al. ()] ‘Respuesta con enfoque de derechos de la niñez frente a la pandemia por COVID-19 en Chile,
457 Colombia y Perú’. F González , M C Pinzón-Segura , B L Pineda-Restrepo , Calle-Dávila Mc , Siles Valenzuela
458 , E Herrera-Olano , N . 10.26633/RPSP.2021.151. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.151> *Rev*
459 *Panam Salud Pública* 2021. 45 p. e151.
- 460 [Tesis] Xix Tesis . *Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. III, noviembre de 2019*, p. 2000. (10a.)
- 461 [Tesis: I.8o.C.41 K (9a Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 5, diciembre de 2011)]
462 ‘Tesis: I.8o.C.41 K (9a’. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. 5, diciembre de*
463 *2011*, p. 3771.